



MODERNIZACION DEL EJERCITO: TECNIFICACIÓN, AUMENTO DE EFECTIVOS Y COMBATE AL CRIMEN

Licda. Rossana Gómez
Investigadora

*Tema preparado para programa Guatemala Hoy de
Radio Universidad, 11 marzo 2008*

Una duplicación del número de efectivos del Ejército fue planteada por el Vicepresidente de la República, Rafael Espada, al culminar la visita de una delegación de oficiales estadounidenses al país. La iniciativa que por primera vez, en los 12 años del proceso de paz, se expone tan abiertamente, sacudió la opinión pública, agravada por la propuesta oficial de que este aumento de elementos castrenses se destinaría al combate del crimen organizado, una función que genera gran polémica.

Al parecer la propuesta es parte de un Plan de Modernización del Ejército, que sería un seguimiento al Programa de Modernización iniciado en el gobierno de Berger, el cual planteaba la tecnificación, el equipamiento y la calificación del Ejército; pero, proponía una reducción sustancial de los efectivos. Este plan no tuvo avances en las metas de tecnificación. Sí hubo un recorte de personal, pero este resultado finalmente se vio limitado con la recontractación de 3000 soldados para patrullaje durante ese mismo gobierno.

Recortes y aumentos de personal castrense

Aunque el presidente Álvaro Colom aclaró posteriormente que lo dicho por Espada, se trataba de una "mala interpretación"; hubo otra información por demás relevante, que el vicemandatario dio a conocer y que fue ratificada por el vocero de la institución castrense, Daniel Domínguez. Por un lado, los funcionarios informaron de la existencia de un Plan de Modernización del Ejército que fue presentado por el Ministerio de la Defensa al presidente de la República y que contempla no sólo la capacitación y tecnificación, sino, el incremento del recurso humano. (ver recuadro).

Por otro lado, Espada retomó viejos argumentos y planteó, "Como estamos en tiempos de paz, los militares tendrán asignaciones en áreas sociales, como parte de su especialización".

En el mismo sentido, llama la atención declaraciones de actores sociales como Gustavo Porras y del

mismo presidente Colom, que apuntan en esta misma dirección.

Porras planteó que los Acuerdos no le ponen límite alguno a los recursos del ejército; y que lo contrario habría sido un absurdo, ya que es imposible anticipar las contingencias. Agregó que ningún Estado va a subordinar sus necesidades de seguridad y defensa a lo pactado en Acuerdos de ningún tipo, incluyendo sus propias leyes. Considera que el límite de 33%, establecido en la parte operativa de los Acuerdos no significa que por siempre y para siempre la institución va a tener un número fijo de efectivos y presupuesto.

Colom por su parte, queriendo negar las declaraciones de Espada afirmó que "si llegara a ser necesario un incremento, el número de efectivos podrían llegar a unos 21 mil, pero no a 30 mil."

Lo cierto es que finalmente parece evidenciarse que el aumento de efectivos se contempla seriamente y que puede ser un hecho en este gobierno.

Desde 1997, hubo 6 recortes de personal militar. Los mayores en 1997 y el 2004. Según datos presentados por Gabriel Aguilera, el total de los recortes llevó el número de efectivos de 50,160 en 1996 a 15,500 en el 2004. Se redujeron más del 33% comprometido en los acuerdos, hasta un 69%. No obstante, el presupuesto, que se redujo en sus aprobaciones anuales, se compensaba con transferencias que finalmente impidieron honrar este compromiso.¹

Sandino Asturias, entrevistado en Radio Universidad, considera que el recorte de número de efectivos no ha sido tan elevado como parece. Un primera reducción obedeció al cese del reclutamiento forzoso que ya venía realizándose dos años antes de 1996, desde los primeros acuerdos firmados. Luego, en el 2004, en la reducción de 11,214 efectivos, se contemplaba la eliminación de 6000 plazas fantasmas. Y en el 2006 el mismo gobierno, incorporaba 3,000 soldados al patrullaje de las calles.

En este sentido, el analista subraya la pérdida que significa decisiones contradictorias de desmovilizar y recontractar ya que el costo de la desmovilización llega a los Q 800 millones.

Por su parte, otros sectores, refiriéndose a las funciones sociales del Ejército como justificación para su crecimiento, apuntaron que existen ministerios y otras instituciones responsables de los temas sociales, que son los que deben contratar el personal indicado.

Además, es de considerar que el recorte de efectivos es un proceso caro, que sólo en el 2004 costo Q 400 millones, destinados al pago del pasivo laboral y otras prestaciones. De este monto, el 44% correspondió al pago a 501 oficiales de alto rango. El pago de pensiones mensuales que se estableció entre Q 8 mil a Q 13 mil, quedó como una carga de Q 45 millones que deberán financiarse anualmente, con fondos públicos.²

¹ Gabriel Aguilera, Guatemala Democratización y Reforma al Sector Seguridad.

² DIGI, USAC, Reestructuración y Modernización del Ejército, 7 mayo 2004

Se aleja fortalecimiento del ejército

El anuncio del pretendido aumento de efectivos, se dio en el marco de la visita de una comitiva de oficiales estadounidenses encabezados por el embajador en Guatemala, James Derham, que vinieron al país para trabajar el tema de la seguridad, migración y fortalecimiento de las fuerzas armadas; y anunciar el apoyo al Ejército y el envío de 4 helicópteros para combatir el crimen organizado.

En este sentido, cabe observar que las reformas y el proceso de modernización del Ejército de Guatemala, abre espacio para un mayor acercamiento y nuevas coincidencias con el gobierno de los Estados Unidos. Las nuevas amenazas que asume el Ejército, son claramente las mismas prioridades para la política de Seguridad de los Estados Unidos. Por otro lado, las demandas de equipamiento, plantea un mayor apoyo y dependencia de la potencia del norte. Efectivamente, en el 2004 el presidente estadounidense George Bush indicó que el plan de modernización del Ejército merecía la atención de su gobierno, y dio instrucciones para que la petición de apoyo sea atendida y gestionada en el Congreso para levantar la prohibición en las dos cámaras.

Sin embargo, no se avanzó en este sentido, y la tecnificación del Ejército sigue en espera, por lo que se continúa aun sin dar respuesta a las mismas fuerzas castrenses que creyeron en esta causa. Se está efectivamente frente a unas fuerzas armadas, realmente débiles y que 12 años después de la firma de la paz, no encuentran un rol propio ante la finalización de la guerra.

Según Sandino Asturias, esta situación se agrava porque, por un lado el Ejército no tiene un proceso de definición de sus propias amenazas; no sabe hacia donde va; no tiene una política propia; es manipulado; es instrumentalizado. Por el otro, tiene un desgaste que le impide su profesionalización, pues los esfuerzos que se hacen es por convertirlo en un Ejército policiaco, y ello le impide desarrollar su capacidad para asumir sus responsabilidades fundamentales de defensa territorial. El resultado es que, ni se tiene un Ejército capacitado, ni se esta deteniendo la inseguridad, que crece incontenible.

Papel del Ejército frente a la seguridad

Los Acuerdos de Paz, establecían 3 aspectos en la reconversión del Ejército, su reducción, la reducción de su presupuesto y el cambio de la doctrina militar.

En este último aspecto, y con participación de sociedad civil, se elaboró el Libro Blanco de la doctrina militar del Ejército, el cual según Asturias, fue presentado al ex presidente Alfonso Portillo, que no lo aprobó. Luego se le presentó al ex presidente Berger; pero nos se consigue que tenga el suficiente respaldo del Ejecutivo como para ser considerado un documento oficial vigente.

En esta nueva doctrina, que busca llegar a la profesionalización del Ejército, se establecen claramente los grandes lineamientos que limitan la participación militar en el tema de seguridad ciudadana.

El ejército en la seguridad interna

Hoy Espada retoma el tema en otra dirección al precisar que el plan de modernización del Ejército, tiene por objetivo “combatir al crimen organizado” y detallara que los nuevos castrenses serían asignados para resguardar las fronteras y las aduanas, a fin de combatir el narcotráfico y el crimen organizado”.

Al parecer serán las fronteras la razón para la entrada del apoyo de Estados Unidos y del Ejército de Guatemala, al tema de la seguridad interna.

Esto es objeto de una gran polémica. Determinar dónde comienza y dónde termina la responsabilidad y la competencia de un ejército para atender el tema de la seguridad interna, cuando el crimen trasciende las fronteras.

Para Gustavo Porras, la función principal del Ejército es “la defensa de la soberanía y del territorio, lo que supone cuidado de sus fronteras”. Esto, considera el analista, “significa arrebatarle el control al crimen organizado, de manera que el Ejército puede y debe contribuir al objetivo de combatir la delincuencia, sin por ello convertirse en una policía”. (Siglo XXI, 29 de febrero 2008)

No obstante, para Asturias, la responsabilidad de la seguridad pública es del Ministerio de Gobernación. El Ejército puede cooperar. Y cita como ejemplo, el equipo militar que sólo tiene esta institución como radares, naves marítimas, aviones de intercepción y que pueden servir para esos fines.

Pero, el Ejército no está preparado para tareas de seguridad. Contrario a la función de la policía que es preventiva o disuasiva, la función del ejército es

represiva. La presencia militar es para atacar. Considera por ello importante que los soldados no vayan solos en los patrullajes y que el mando no lo pierda la policía civil, ya que en la práctica los soldados por su mayor organización y capacidad terminan dirigiendo las patrullas.

Entre los riesgos cita como ejemplo, un soldado con un Galil o un M-16 (fusiles que pueden disparan en ráfaga) repeliendo un asalto en un autobús. El uso de armas cortas que utiliza la policía tiene una función táctica operativa que se corresponde con su labor, afirma.

Por otro lado, constitucionalmente el Ejército tiene prohibido detener a personas y no están preparados para buscar pruebas para la investigación criminal. No es su función.

Lo que se requiere es entonces, fortalecer a la policía con elementos, equipo, capacitación; y por otro lado avanzar en la profesionalización del Ejército en su función de Defensa territorial.

Desclasificación y avances en la modernización

A la llegada del nuevo gobierno, se hizo público que 72 oficiales fueron puestos a disposición del ejército. Colom confirmó en CNN que habían dejado fuera de la institución a personas vinculadas al pasado o con señalamientos. Además, anunció que desclasificará los archivos militares.

El 3 de marzo, Colom hizo el anuncio de aperturar los archivos clasificados y el 5 de marzo la misma Corte resolvió, por unanimidad, negar en definitiva amparo al general Efraín Ríos Montt, y accede a la desclasificación de cuatro planes militares ejecutados en la década de 1980. Con esto se desclasificarán los planes Campaña Sofía 82, Victoria 82, Firmeza 83 y Operación Ixil para buscar indicios que respalden las investigaciones de las masacres cometidas por el Ejército.

Todo ello parecen muestras de que se avanza en cambios hacia la depuración del ejército y democratización del Estado, un tema que conviene incluso a las mismas fuerzas armadas, para lograr los apoyos, ante todo internacionales. Sin embargo, los resultados aún son dudosos en el clima de criminalidad, impunidad y de debilitamiento histórico del Estado.

Así, se cuestiona, qué impacto realmente puede esperarse de la desclasificación, si el sistema de justicia no ha reportado a la fecha ningún solo juicio contra militares acusados. Incluso en diciembre del 2007, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto el proceso judicial contra cinco militares y dos civiles guatemaltecos acusados de genocidio por la Audiencia Nacional de España.

Según Asturias, de esta desclasificación se espera poco, los temas que podrían vincular a casos de derechos humanos, fueron eliminados 10 años atrás.

Otto Pérez, afirmó que “En los archivos no van a encontrar que se haya ordenado o diseñado una

operación en el período del conflicto armado para ir a matar a gente inocente, eso no va estar en ningún archivo; lo que podría aparecer es que se montó un operativo, para controlar a grupos insurgentes que andaban armados y estaban matando y amenazando a gente”. Consideró la medida como puramente política, que genera falsas expectativas.

El general José Luis Quilo Ayuso, de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, “No hay nada de lo que andan buscando. Tengan la plenitud que nada estará escrito, si existiera responsabilidad del Ejército”, afirmó. (Prensa Libre 26 febrero 2008).

RECUADRO 1

EL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL GOBIERNO DE BERGER

Hay que recordar que en el 2004, cuando el General Otto Pérez, estaba a cargo de la Comisión Presidencial para la Seguridad y Defensa, el Ejército planteó un Programa de Modernización, tras la decisión tomada por el presidente Oscar Berger y su Gabinete de Seguridad, de reducir al ejército.³

En ese entonces, la decisión se tomó en momentos en que se establecía un gobierno de corte neoliberal que promulgaba una reducción del Estado. Según señaló entonces el presidente de la Comisión de Transformación y Modernización del Ejército, coronel Francisco Bermúdez, la limitación de recursos era una oportunidad del Ejército para modernizarse.

Con un malestar en las filas del ejército que sólo fue neutralizado con los pagos de prestaciones y pensiones, se puso en marcha el drástico recorte de personal y el cierre de bases militares. Esta fue la segunda mayor desmovilización que obligaba a un rediseño de la estrategia militar, de la organización del Ejército, de la política militar, de las leyes relativas al tema y de las relaciones con Estados Unidos.

La reorganización del Ejército estaba orientado por la identificación de las nuevas amenazas: el narcotráfico, el terrorismo y las migraciones ilegales, entendidas estas últimas como “crimen organizado que trasiega personas”. Según la concepción de este Programa de Modernización del Ejército, Guatemala tiene una frontera natural entre lo que llama “el primer y tercer mundo”. Ésta es una “cortina de amortiguamiento” que detiene el flujo continental de narcotráfico y de millones de migrantes. Es “la nueva Tijuana”.

Estas nuevas necesidades planteaban “sustituir el modelo actual basado en una organización territorial con más hombres y costos logísticos; cuya principal amenaza era de orden interno; y que mantenía una orientación contrainsurgente” por “plataformas operativas que tendrían menos hombres que permanecerían concentrados y se movilizarían en unidades de despliegue rápido, más flexibles y con mejor potencial de fuego”.

La nueva organización requiere de mayor movilidad y equipamiento, por lo que se eliminó el concepto de jurisdicción militar, y las 7 bases fueron sustituidas por 5 brigadas de infantería, 3 unidades estratégicas y 5 comandos especiales. En términos

³ DIGI, USAC, Reestructuración y Modernización del Ejército, 7 mayo 2004

de equipamiento implicaba mejorar las comunicaciones, el transporte terrestre y el equipo individual de los efectivos.

En un segundo plano, la transformación de fuerzas contemplaba dar mayor importancia a las fuerzas de mar y aire: la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra. Las demandas principales son 10 aviones A-37 utilizados en la guerra contra Vietnam y contra el narcotráfico; 15 helicópteros Black Hawk y por lo menos 1 avión no tripulado. La Marina requeriría de lanchas rápidas y autonomía para navegar en aguas internacionales. Para tierra se plantea la compra de unidades Hummer utilizado durante la guerra del Golfo.